Ante los graves hechos ocurridos en el seno del Gobierno de Cantabria, el 170 Consejo de la Unión Sindical Obrera de Cantabria aprueba la siguiente

RESOLUCIÓN ESPECIAL

La corrupción en el ámbito público socava la democracia y la representatividad ya que permite que los políticos y los funcionarios públicos sin escrúpulos se aprovechen de su posición para obtener ganancias personales ilícitas en lugar de servir al público.

La corrupción inhibe el crecimiento económico y la inversión al aumentar el costo y reducir la confianza en las instituciones, a la vez que impide la distribución equitativa de los recursos lo que afecta muy negativamente a los más vulnerables.

La corrupción erosiona gravemente la confianza en las instituciones públicas y en los líderes políticos y ello daña severamente la estabilidad y la cohesión social.

Por tanto, la trama corrupta destapada en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, afecta a valores fundamentales como la DEMOCRACIA, la CONFIANZA, la COHESIÓN SOCIAL, la IGUALDAD y la ESTABILIDAD, entre otros.

Para USO Cantabria, el Gobierno de Cantabria debe acometer con EJEMPLARIDAD la lucha contra estas prácticas delictivas realizadas en su seno, y lejos de organizar incomprensibles homenajes a quien ha demostrado cuanto menos escasa o nula diligencia en el desempeño de sus obligaciones, tiene que promover las acciones políticas para que se resuelvan las responsabilidades penales y políticas que se deriven.

USO insta al ejecutivo regional a llevar a cabo una acción política digna que restañe el daño infringido a la imagen de los servidores públicos que son una víctima más del expolio a las arcas públicas llevado durante años por falta de medidas de control que debieran haber sido implementadas.

La Comunidad Autónoma de Cantabria atraviesa una difícil situación que tiene su origen en desajustes estructurales. La crisis industrial, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes que les obliga a elegir entre la emigración o empleos basura, el progresivo envejecimiento de la población, el fuerte deterioro del sector primario, hace temer por el futuro.

El Gobierno regional parece no enterarse de la corrupción que anida en su interno pero tampoco parece enterarse de los conflictos que padece la sociedad cántabra. En la pasada huelga del Metal el ejecutivo regional se comportó como un mero espectador y tuvieron que ser responsables de otras administraciones quien mediara con éxito en el conflicto. En este momento, con una huelga de casi 50 días en ASPLA, al Gobierno regional ni está ni se le espera. La inacción supera a estas fechas los límites de lo tolerable.

Cantabria necesita, hoy más que nunca, un impulso decidido. Las diferentes administraciones públicas, entre ellas el Gobierno Regional, deben ser motores de cambio y no una carga ni una rémora para el conjunto de la sociedad.

Santander a 17 de marzo de 2023